

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 7º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-13140-2023
CARATULADO : ARAOS/CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Santiago, diez de abril de dos mil veinticinco

VISTOS:

Con fecha 1 de agosto de 2023, mediante presentación ingresada a través de la Oficina Judicial Virtual, comparece don LUIS PÉREZ CAMOUSSEIGHT, abogado, domiciliado en Doctor Sótero del Río N° 326, oficina N° 707, comuna de Santiago, en representación de doña **MYRIAM DEL CARMEN ARAOS GARNICA**, dueña de casa, domiciliada en Tácito N° 5.174, Villa Sur, comuna de Pedro Aguirre Cerda, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del FISCO DE CHILE, representado legalmente por don RAÚL LETELIER WARTENBERG, presidente del Consejo de Defensa del Estado, ambos con domicilio en calle Agustinas N°1225, cuarto piso, comuna de Santiago, Región Metropolitana.

Expone que doña Myriam del Carmen Araos Garnica, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura, Valech 1 N° 1.602, de actuales 54 años de edad, a la fecha de ocurrencia de los hechos se desempeñaba como dirigente estudiantil y poblacional, miembro de las Juventudes Comunistas, cursando un embarazo de casi cuatro meses.

Relata que la actora fue detenida en el domicilio de sus padres, ubicado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, el día 31 de marzo de 1988 por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), en un operativo selectivo con allanamiento. Agrega que sus aprehensores la subieron a un furgón blanco, con la cabeza cubierta, y la trasladaron a un recinto desconocido de la CNI (donde escuchó ruidos de una construcción y voces de niños de un colegio), lugar donde fue torturada, siendo golpeada en la cara y en la cabeza y víctima



Foja: 1

de una violación, además de darle manotazos en los pechos, pese a encontrarse cursando un embarazo de casi cuatro meses, todo con el objeto de que delatara a su hermano Roberto, acusado de participar en el asalto a un camión Brincks, siendo obligada, luego, a firmar un documento en blanco. Menciona que el mismo día 31 de marzo de 1988, aproximadamente a las 19:30 horas, fue trasladada e ingresada al cuartel Central de la Policía de Investigaciones ubicado en calle Borgoño, en el centro de Santiago, lugar donde doña Myriam permaneció ilegalmente incomunicada durante 5 días.

Refiere que ante su negativa a colaborar, el 4 de abril de 1988 fue puesta a disposición de la 2da. Fiscalía Militar de Santiago e ingresada en calidad de incomunicada a la Cárcel Anexo Femenino ubicada en calle Santo Domingo, en el centro de Santiago. Sostiene que el día 8 de abril de 1988 fue sometida a proceso en causa rol 686-88, acusada de ser “ayudista” de un grupo de combate, y por infracción al artículo 8° de la Ley de Control de Armas, prorrogándose su incomunicación hasta el día 13 de abril de 1988.

Indica que en la Fiscalía Militar, al momento de prestar declaración, fue amenazada, señalándole el actuario de la causa que, de no ratificar sus declaraciones extrajudiciales obtenidas bajo tortura en la CNI, sería devuelta a la custodia de sus captores. Expone que su defensa fue asumida por la abogada doña Carmen Bertoni quien, en diferentes escritos de solicitud de revocación de encargatoria de reo y recurso de queja, denunció las torturas y apremios ilegítimos a los que fue sometida doña Myriam y las severas irregularidades procesales. Afirma que se le negó sistemáticamente la libertad provisional sin causa alguna y sin que existieran antecedentes para sostener la encargatoria de reo, más que sus declaraciones extrajudiciales. Finalmente, asegura que se logra su libertad provisional el día 27 de julio de 1988, que en diciembre de 1989 se revoca su encargatoria de reo y que en julio de 1991 se sobresee definitivamente la causa que era llevada en su contra.

Luego, hace mención del informe psicológico de fecha 8 de julio de 2023 que le fue realizado a doña Myriam por parte del PRAIS del Servicio de Salud Metropolitano Sur, que en lo pertinente destaca que: “Existe un daño asociado a causa del evento represivo que ha permanecido en Myriam Araos y su familia en relación a ser afectada directa junto con su familia por la detención,



Foja: 1

violencia, prisión política, tortura, persecución. Las secuelas de las vulneraciones en su familia se han extendido desde las percepciones de cada miembro de la familia, lo que generó conductas de desorganización familiar y efectos de traumatización extrema y trauma transgeneracional en el núcleo familiar a causa de la violencia ejercida por instituciones del Estado en dictadura militar”.

Más adelante, invoca el daño producido, indicando que como consecuencia directa de las torturas sufridas por el demandante se desprende un perjuicio tanto psíquico, físico y moral inconmensurable provocado por el Estado de Chile durante el periodo del gobierno dictatorial. Además de un perjuicio material evidente.

Luego de reproducir un fallo de la Excma. Corte Suprema (Rol: 5946-2009), indica que el daño moral se hace patente por sí mismo en atención a los hechos, es decir, salta a la vista de lo evidente que es y que las angustias, padecimientos y dolores, sumadas a las incertidumbres, miedos, inseguridades, son fáciles de entender en su plenitud, y sólo cabe al sentenciador hacer una estimación fundada de su magnitud y del monto de la reparación.

Expone que demanda al Fisco de Chile, por daño moral, como consecuencia directa de las torturas de que fue objeto, el pago de doscientos millones de pesos (\$200.000.000), para éste, suma que deberá ser pagada con reajustes de acuerdo al IPC e intereses legales desde la fecha de notificación de la demanda hasta su completo pago, más las costas del juicio; o en su defecto el monto indemnizatorio que estime el tribunal de conformidad con su apreciación y valorización del daño.

En cuanto al derecho, menciona que el Estado de Chile ha reconocido expresamente su responsabilidad en la práctica de secuestro y tortura ocurrida durante la dictadura militar, mediante distintos actos e instrumentos jurídicos, entre ellos cabe destacar el Informe emitido por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y el Informe sobre Prisión Política y Tortura, conocido como “Informe Valech”. En efecto, señala que en el mencionado Informe Valech, su representada fue reconocido como víctima de prisión política y tortura.



Foja: 1

Refiere que la doctrina iuspubliscista ha sostenido que existe un principio general de derecho administrativo que obliga a responder al Estado por los perjuicios causados por actos u omisiones de sus agentes a las víctimas que no se encuentran obligadas a soportarlos.

En el mismo sentido, cita diversas disposiciones de la Constitución de 1925, respecto al principio de la igual repartición de las cargas públicas y la obligación a indemnizar a todo aquel que infringiera un daño, ya que dicho daño producido antijurídicamente implicaba una ruptura de la igual repartición de las cargas públicas, derecho que la Constitución aseguraba y amparaba frente a sus violaciones, y en especial a aquellas cometidas por los órganos públicos.

Señala que la jurisprudencia ha evolucionado hasta llegar a un estado, pacífico en la actualidad, que reconoce la responsabilidad del Estado-Administrador, exigiendo, en la mayoría de los casos, un factor de imputación. En el caso el factor de imputación es la responsabilidad del órgano por la falta personal del agente.

Seguidamente, hace presente la responsabilidad en el Derecho Constitucional y Administrativo, citando lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 38 de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 4 y 44 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Después de adjuntar la opinión de los autores Noguera Alcalá y Soto Kloss, afirma que la acción de derecho público para exigir la responsabilidad del Estado por actos u omisiones por las cuales se ha producido daño a las personas, es imprescriptible y que la responsabilidad del Estado es un problema de derecho público y al cual cabe aplicar reglas de derecho público y no las normas del Título XXXV del Código Civil. Agrega que la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores también ha recogido la inaplicabilidad de las reglas del Título XXXV del Libro IV del Código Civil y, por ende, de las reglas en materia de prescripción. Al efecto, reproduce los fallos dictados en causas rol N°24.288-2016 y 3058-2014, por la Excma. Corte Suprema.

Posteriormente, hace mención a los fundamentos del Derecho Internacional que obligan al Estado a indemnizar. En ese sentido, cita lo



Foja: 1

dispuesto en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, la resolución 60/147 sobre los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005 y los artículos 2 y 9 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Destaca que la CIDH ha señalado que la indemnización por violaciones a los derechos humanos encuentra su fundamento en instrumentos internacionales de carácter universal y regional. Así lo ha entendido el Comité de Derechos Humanos, creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y la Corte Europea de Derechos Humanos con base en el artículo 50 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Respecto a la procedencia de la indemnización del daño moral, indica que la responsabilidad del Estado es integral, es decir, debe repararse y todo daño causado a un particular y, para una correcta interpretación de estas disposiciones que dejan un claro vacío las normas de derecho administrativo indicadas, es necesario acudir al derecho común. Menciona que la indemnización comprende -según el artículo 2329 del Código Civil- todo daño, por lo que naturalmente está incluido el daño moral y que la procedencia de la reparación del daño moral está reconocida en forma unánime por la doctrina y jurisprudencia nacional y a estas alturas resulta indiscutible.

Por último, indica que en el caso ad litem se dan todos los requisitos que obligan al Estado a indemnizar los perjuicios causados, a saber: 1.- Existencia de daño moral producto de las torturas y prisión política sufridas por mi mandante. 2.- La acción u omisión emanó de órganos del Estado, ya que agentes del Estado torturaron a mi mandante. El hecho que causó daño fue ejecutado por el Estado de Chile, puesto que fueron agentes de un órgano de su administración los que actuaron (miembros del SIM y de la CNI) y debe entenderse que ha actuado el Estado como tal. 3.- Nexos causal. El daño a la víctima emana, justamente, de la perpetración del delito civil y 4.- No existen



Foja: 1

causales de justificación que eximan al Estado de su responsabilidad en este caso.

En definitiva, solicita se condene a la demandada a pagar la suma de **\$200.000.000.-** (doscientos millones de pesos), a favor del demandante doña Myriam del Carmen Araos Garnica, más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el tribunal estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos, con expresa condena en costas.

A **folio 8**, con fecha catorce de agosto de dos mil veintitrés, se notificó la demanda.

A **folio 9**, con fecha cinco de septiembre de dos mil veintitrés, comparece doña RUTH ISRAEL LÓPEZ, abogada Procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, ambos domiciliados en Agustinas N° 1225, piso 4°, comuna de Santiago, contestando la demanda de autos, solicitando el rechazo de la acción de indemnización de perjuicios deducida por doña Myrian del Carmen Araos Garnica, en su calidad de víctima de detención, tortura y apremios ilegítimos, en base a las excepciones, defensas y alegaciones que expone.

En primer lugar, opone la excepción de reparación integral, alegando la improcedencia de la indemnización solicitada por haber sido ya indemnizada la demandante, alegando que la Ley N° 19.123, así como otras conexas, como la Ley N° 19.992, han establecido distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado la compensación a víctimas de violaciones a los derechos humanos y a familiares directos de éstas, mediante tres tipos de compensaciones: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas. Explica que por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas.

Luego, analiza cada una de estas compensaciones, señalando, respecto a la reparación mediante transferencias directas de dinero, que en término de



Foja: 1

costos generales para el Estado de Chile, este tipo de indemnizaciones ha significado a diciembre de 2019, un desembolso total de \$992.084.910.400, que corresponden a las siguientes indemnizaciones: a) Pensiones: la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech); b) Bonos: la suma de \$41.910.643.367- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992; y c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.- d) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737.

Indica que la actora ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las Leyes N° 19.234 y 19.992, y sus respectivas modificaciones, estableciendo esta última una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas, así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad. Adicionalmente, consigna que la actora recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.

En cuanto a las reparaciones mediante asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, explica que se concedió a los beneficiarios de la Ley N° 19.234, como de la Ley N° 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), ofreciéndose asimismo el apoyo técnico y de rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Adicionalmente, se incluyeron entre dichos beneficios, aquellos de carácter educacional, consistentes en la continuidad y gratuidad de los estudios básicos, medios o superiores, ello a cargo de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, además de haberse concedido beneficios en vivienda.



Foja: 1

Finalmente, y en lo relativo a las reparaciones simbólicas, refiere que parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones, destacando la ejecución de diversas obras, como las siguientes: a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago en el año 1993; b) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido; c) La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; d) El establecimiento, mediante la Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos; e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país; entre otros.

Sostiene que de todo lo expresado se puede concluir que los esfuerzos del Estado de Chile, por reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, han cumplido todos los estándares internacionales de justicia transicional y han provisto de indemnizaciones acordes a nuestra realidad económica, que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de tales violaciones.

Así las cosas, estima que tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos; de esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente, por lo que, estando las acciones interpuestas en autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias enunciadas, opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizada la demandante de la presente causa.

En subsidio de lo anterior, opone la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescrita, se rechace la demanda en todas sus partes.



Foja: 1

Ello por cuanto del relato de la actora la detención ilegal y tortura que sufrió ocurrió a partir del día 8 de octubre del año 1973 hasta el día 28 del mismo mes y año 1974[sic], en circunstancias que la demanda de autos fue notificada a su parte con fecha 11 de agosto de 2022, habiendo transcurrido con creces el plazo de prescripción establecido en el artículo 2332 del Código Civil, aun si se entiende suspendido el referido plazo legal durante todo el período de la dictadura militar.

En subsidio y para el caso de estimarse que el artículo 2332 del Código Civil no es aplicable al caso de autos, alega la prescripción extintiva ordinaria de acciones y derechos de cinco años, que previenen los artículos 2514 y 2515 del Código Civil, por cuanto entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a la indemnización y la fecha de notificación de la demanda, habría transcurrido en exceso dicho plazo legal.

Expone que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe, siendo la prescripción una institución universal y de orden público, donde las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil, que la consagran se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado.

Indica que ninguno de los instrumentos internacionales contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia, como la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, los Convenios de Ginebra de 1949, la Resolución N°3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas o la Convención Americana de Derechos Humanos.

Concluye que no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no debe apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil,



Foja: 1

que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado, debiendo rechazar la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

En tercer término, en cuanto al daño e indemnización reclamada, en subsidio de las defensas y excepciones planteadas precedentemente, controvierte el monto solicitado, atendida la naturaleza de la indemnización solicitada, considerando excesiva la suma, haciendo presente que la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso, por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva, debiendo atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, siendo las cifras pretendidas en la demanda excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia.

En cuarto lugar y en forma subsidiaria, alega que en todo caso en la fijación del daño moral por los hechos esgrimidos en autos, el tribunal debe considerar todos los pagos recibidos por la actora a través de los años por parte del Estado conforme a las leyes de reparación (19.123, 19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral, ya que de no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Finalmente, hace presente la improcedencia de los reajustes e intereses del modo en que han sido solicitados por la demandante en su libelo, por



Foja: 1

cuanto los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene de indemnizar, y por tanto, no existe ninguna suma que deba reajustarse. Respecto de los intereses, señala que el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia, por consiguiente, en el hipotético caso de que se decida acoger la acción de autos y se condene al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

En virtud de todo lo anterior, solicita se rechace la acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

A folio 13, con fecha ocho de septiembre de dos mil veintitrés, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica, dando por reiterando todos los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda.

En primer lugar, alega la improcedencia de las excepciones de pago ya que esta no es de ninguna manera incompatible con la indemnización que se persigue, atendido que estas reparaciones no dan cabida para reparar todo el daño que se les ha ocasionado a las víctimas. Por otra parte, indica que no se ha establecido en las leyes N° 19.234, N° 19.992 que estableció medidas de reparación para las personas calificadas como víctimas de prisión política y tortura, y sus modificaciones y la ley N° 20.874, ningún régimen de incompatibilidad con las indemnizaciones judiciales, ni mucho menos que su aceptación implique una renuncia a las acciones judiciales correspondientes. Afirma que con estas leyes, el Estado asume voluntariamente formas distintas de reparación y reiteramos que no implica la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia por los medios que autoriza la ley y que así lo ha establecido en numerosas ocasiones la jurisprudencia de la E. Corte Suprema, en sentencias dictadas en causas por graves violaciones a los derechos humanos (Rol N° 30.598-14; N° 40.168-



Foja: 1

2017; N° 5436-10, sentencia reemplazo; Rol N° 62.211-16; Rol N° 82.246-16).

Respecto a la excepción de prescripción extintiva opuesta por la contraria, indica que la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha sido enfática en señalar, en múltiples ocasiones que, tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contenidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, la que es integrante del ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, y que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la Ley 19.123 reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas, por violación a los derechos humanos en el periodo 1973-1990, comprendidas en los Informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario (en este sentido, cita las sentencias Excma. Corte Suprema Roles N° 20.288-14, de 1e de abril de 2015; N° 1-424-2013 de 1 de abril de 2014; N° 22.652-2014 de 31 de marzo de 2015; entre otras).

En cuanto al monto de la indemnización, indica que este monto se ha ido incrementando y se está llegando a indemnizaciones reales y serias, sobre todo en aquellas demandas en las que es el Estado quien debe responder por graves crímenes cometidos en contra de sus propios ciudadanos.

Respecto al reajuste e intereses, señala que están conforme a derecho, puesto que un tribunal fija los montos en un momento determinado, pensando en el valor adquisitivo de esa fecha, razón por la cual tiene que considerar la desvalorización.



Foja: 1

A **folio 15**, con fecha veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, la parte demandante evacuó el trámite de la dúplica, dando por reiterando todos los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la contestación.

Insiste que la ley 19.992 tuvo un fin reparatorio, ya que, en caso contrario, no tendría otra explicación o justificación el pago que se otorga a determinadas personas calificadas como víctimas de prisión política y tortura. Aclara que dicho mecanismo indemnizatorio establecido por la ley, es sin duda, especial y trasunta un sistema que el Estado asumió voluntaria y directamente en favor de estas personas, para la reparación de daños morales. Por lo anterior es excluyente de otras indemnizaciones, tanto porque sus beneficios son renunciables, como por cuanto la ley sólo la hace compatible con otras pensiones.

Recalca que la indemnización demandada es improcedente, por haber sido ya pagada por el Estado de acuerdo a la ley 19.992 y obviamente resulta incompatible con los beneficios ya otorgados por el Estado, los que tuvieron un carácter claramente indemnizatorio del daño moral.

En relación a la excepción de prescripción, reitera la importancia de la sentencia de la Excma. Corte Suprema de 21 de enero de 2013 Sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno con fecha 21 de enero de 2013 en los autos rol 10.665-2011 “Episodio Colegio Médico-Eduardo González Galeno” y que citó a pie de página respecto de su singularización, en el escrito de contestación a la demanda. Destaca que el pleno de la Excma. Corte concluye que las acciones por responsabilidad extracontractual en contra del Estado prescriben en el plazo de 4 años desde la perpetración de los hechos, conforme a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil.

Respecto al daño moral, añade que conforme a la doctrina, no existen los daños morales evidentes aun tratándose de víctimas por repercusión, por lo que, teniendo presente el art. 1698 del Código Civil en cuanto a que las aligaciones incumbe probarlas a quien las alega; aun tratándose de un daño extrapatrimonial, el daño moral debe probarse tanto en su existencia como en su extensión.



Foja: 1

A **folio 17**, con fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los que deberá recaer ésta.

A **folio 44**, con fecha seis de mayo de dos mil veinticuatro, se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha uno de agosto de dos mil veintitrés, comparece el abogado don Luis Pérez Camousseight, en representación de doña Myriam Del Carmen Araos Garnica, quien viene en deducir demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Raúl Letelier Wartenberg, solicitando se le condene al demandado al pago de \$200.000.000.- (doscientos millones de pesos), por los daños sufridos como víctima de secuestro, tortura y prisión política por agentes del Estado.

Funda su solicitud en las razones de hecho y de derecho expuestos en la parte expositiva de la sentencia, las cuales se dan por reproducidas para todos los efectos legales.

SEGUNDO: Que, con fecha cinco de septiembre dos mil veintitrés, comparece doña Ruth Israel López, abogada Procuradora Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, contestando la demanda por el Fisco de Chile, solicita el rechazo de la acción de indemnización de perjuicios deducida por doña Myriam Del Carmen Araos Garnica, en base a las excepciones, defensas y alegaciones relatadas en la parte expositiva de la sentencia, las que se dan por reproducidas para todos los efectos legales.

TERCERO: Que, con fecha seis de noviembre de dos mil veintitrés, se recibió la causa a prueba, estableciéndose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1°.- Existencia, naturaleza y monto de los perjuicios demandados a causa de la detención, rapto y tortura de doña Myriam Del Carmen Araos Garnica, a manos de agentes del Estado. 2°.- Si dichos daños o perjuicios derivan de la falta de servicio del Fisco de Chile y circunstancias de los mismos. 3°.- Efectividad de haber recibido la demandante algún tipo de indemnización, beneficio y/o reparación, en virtud



Foja: 1

de las leyes especiales de reparación y 4°.- Efectividad de haber operado los supuestos para que se encuentre prescrita la acción impetrada.

CUARTO: Que, a fin de acreditar los fundamentos de su acción, la parte demandante rindió la siguiente prueba:

I.- Documental:

1.- Informe psicológico emitido por el PRAIS del Servicio de Salud Metropolitano Sur de doña Myriam Del Carmen Araos Garnica, de fecha 8 de julio de 2023.

2.- Artículo titulado “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental, elaborado por el Programa de Salud Mental de la Vicaría de la Solidaridad e incorporados en los autos rol C-22.561-2018, del 28° Juzgado Civil de Santiago, seguidos por la misma materia.

3.- Artículo titulado “Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico – psiquiátrico” del mes de julio del año 1978, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.

4.- Artículo titulado “Tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980. Su impacto psicológico” del mes de julio del año 1980, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.

5.- Artículo titulado “Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos” del mes de Abril del año 1987, suscrito por las trabajadoras sociales Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards y Ximena Taibo Grossi, del departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad.

6.- Artículo titulado “Salud Mental y violaciones a los Derechos Humanos” del mes de junio del año 1989, suscrito por el Dr. Andrés Donoso, Dr. Guillermo Hernández, Ps. Sergio Lucero, Dr. Ramiro Olivares y Aux. Enf. Janet Ulloa, del equipo de salud de la Vicaría de la Solidaridad.

7.- Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Valech 1.

8.- Nómina de presos políticos y torturados Comisión Valech 1 en la que doña Myriam Del Carmen Araos Garnica figura con el número 1.602.



Foja: 1

9.- Copia de antecedentes de carpeta de doña Myriam Del Carmen Araos Garnica, del Instituto Nacional de Derechos Humanos presentados ante la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura.

10.- Certificado de nacimiento de doña Myriam Del Carmen Araos Garnica emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, de fecha 27 de septiembre de 2023.

QUINTO: Que, por su parte, la parte demandada, a folio 25 acompañó ORD DSGT N°: 4792-18166, remitido por el Depto. Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social a la Procuraduría Fiscal de Santiago, con fecha 1 de diciembre de 2023.

SEXTO: Que, a folio 9 la parte demandada solicitó oficiar al Instituto de Previsión Social (IPS) a fin de que informe sobre todos los beneficios reparatorios del Estado y los montos totales que ha obtenido la demandante Sra. Myriam Del Carmen Araos Garnica, RUT 11.318.728-k, el cual fue evacuado a folio 37 mediante el Oficio ORD.: DSGT N° 18682/2024, emitido por el Instituto de Previsión Social, respecto de los beneficios de reparación Leyes N°s 19.992 y 20.874, emitido con fecha 6 de enero de 2024.

SÉPTIMO: Que, no habiendo sido discutido por el Fisco de Chile los hechos en que se basa la demanda, los cuales además se ven refrendados por los elementos probatorios aportados al juicio, es posible tener por establecidos como hechos no controvertidos, los siguientes:

1.- Que doña Myriam Del Carmen Araos Garnica, miembro de las Juventudes Comunistas, fue detenida ilegalmente por agentes del Estado de Chile, en el día 31 de marzo de 1988, a los 20 años de edad, en su domicilio ubicado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y que el mismo día, fue trasladada e ingresada al cuartel Central de la Policía de Investigaciones ubicado en calle Borgoño, en el cual permaneció por 5 días. El día 4 de abril de 1988, fue puesta a disposición de la 2° Fiscalía Militar de Santiago e ingresada en calidad de incomunicada a la Cárcel Anexo Femenino ubicada en calle Santo Domingo, en el centro de Santiago.

2.- El día 8 de abril de 1988, fue sometida a proceso en causa rol 686-88, acusada de ser “ayudista” de un grupo de combate, y por infracción al artículo 8° de la Ley de Control de Armas, prorrogándose su incomunicación



Foja: 1

hasta el día 13 de abril de 1988. El día 27 de julio de 1988 logra su libertad provisional, en diciembre de 1989 se revoca su encargatoria de reo y en julio de 1991 se sobresee definitivamente la causa que era llevada en su contra.

3.- Que doña Myriam Del Carmen Araos Garnica se encuentra calificada como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I, en el Registro N° 1.602.

OCTAVO: Que, el asunto sometido a la decisión de este tribunal versa sobre el daño moral que habría sufrido el demandante a consecuencia de su detención y torturas en manos de agentes del Estado, y la responsabilidad indemnizatoria que le cabría al Estado de Chile por tales hechos, razón por la cual corresponde determinar, en primer lugar, la existencia de dicha responsabilidad.

En este sentido, ha de considerarse como un hecho público y notorio que en el período comprendido entre el 11 de septiembre del año 1973 y hasta el término del gobierno de facto detentado por las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, existieron casos en nuestro país en que abiertamente se violentaron los Derechos Humanos y esenciales de diversas personas por parte de agentes del Estado. Lo anterior, ha sido reconocido por diversos tribunales que en diversos fallos han destacado la existencia de organizaciones al interior del Estado, tendientes a establecer un régimen sistémico de represión respecto de personas cuyas ideas o actividades contravenían la ideología y órdenes impartidas por el gobierno de Augusto Pinochet Ugarte.

A mayor abundamiento, tales hechos no han sido discutidos en este proceso por las partes y, por tanto, constituye un hecho pacífico, resultando inoficioso adentrarse a determinar la existencia de ese ilícito, encontrándose acreditado que la demandante fue víctima de torturas, vejámenes y diversos maltratos cometidos por agentes del Estado de Chile, constitutivo de violaciones a los Derechos Humanos.

NOVENO: Que, en cuanto al hecho a probar número dos fijado por el tribunal, esto es, la efectividad de existir los perjuicios alegados por la demandante en relación con la conducta imputada a la demandada, el hito generador del daño moral cuya indemnización se persigue es inherente a todo



Foja: 1

cuanto fluye de los hechos dados por acreditados y no controvertidos por el demandado -quien discute únicamente la suma pedida a su respecto-, siendo el daño alegado inseparable a la naturaleza de los hechos, el que si bien no ha sido precisado o identificado científicamente, resulta evidente que se produjo al verse la actora privada arbitrariamente de su libertad personal y luego sometida a diversos malos tratos y torturas. De esta manera se tendrá por acreditado que la detención ilegal y torturas, materializados por agentes del estado de Chile, produjeron el evidente daño moral padecido por la demandante.

A mayor abundamiento, se han acompañado por la parte demandante diversos estudios realizados por expertos en la materia que le otorgan contenido a su pretensión y que dan cuenta de los daños y/o consecuencias dañinas que padecen las víctimas de este tipo de apremio.

DÉCIMO: Que, siendo el fundamento de la demanda la violación a los derechos humanos durante el periodo de la dictadura militar, es preciso mencionar que el presente caso debe ser abordado desde la situación de conflicto que vivía el Estado de Chile durante aquél periodo, siendo de público conocimiento que acaecieron durante esta transición violaciones masivas a los derechos humanos, existiendo obligación por parte del Estado de Chile de reconocer y brindar una reparación íntegra en esta materia, toda vez que aquella obligación deriva de lo que prevé la actual Constitución Política de la República en sus artículos 5 y 6, los cuales incorporan a nuestro ordenamiento jurídico interno los principios generales del Derecho Internacional y la normativa de los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes relativa a los derechos humanos, siendo un deber de los órganos del Estado descartar normas que sean contrarias a la Carta Fundamental.

Entre otras, las normas internacionales que se encuentran incorporadas a nuestro sistema normativo interno está la Convención Americana de Derechos Humanos, desprendiéndose de sus artículos 1.1 y 63.1 la obligación del Estado de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada por una vulneración a los derechos y libertades por ella reconocidos, no pudiendo el Estado de Chile, conforme el artículo 27 de la Convención de Viena,



Foja: 1

desconocer esta obligación, sino que por el contrario, debe respetarlos y promoverlos, haciendo efectivo los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 2.3^a, permite que “Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo”, lo que supone buscar plena reparación, que es concordante con lo consagrado en el principio 15 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005.

De esta forma, la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos nace al momento en que con su actuar infringe los límites que señalan los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad de la persona, como la libertad o la integridad física y/o psíquica.

Finalmente mencionar que la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, donde en su artículo 3 dispone que la administración del Estado está a servicio de la persona humana, siendo su finalidad promover el bien común, y uno de los principios a los que debe sujetar su acción es el de responsabilidad; siendo consecuente con ello el artículo 4 de la misma ley, que prescribe que “El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones (...)”, concordante con lo que dispone el artículo 38 de la Constitución Política de la República.

Todo lo anterior permite concluir que el daño causado por la conducta ilícita de los funcionarios o agentes del Estado autores de los ilícitos de lesa humanidad debe ser indemnizado por el Estado.

UNDÉCIMO: Que, en cuanto a la denominada excepción de reparación integral opuesta por la demandada, por haber sido resarcida la actora conforme a la Ley N° 19.234, así como otras conexas, como la Ley N° 19.992, conforme al hecho a probar número cuatro fijado por el tribunal, esto



Foja: 1

es, la efectividad de que la demandante fue reparada por el daño extrapatrimonial alegado. En la afirmativa, tipo de reparación obtenida y efectividad de ser satisfactiva, cabe señalar que si bien consta en Ordinario DSGT N° 18682/2024, emitido por el Instituto de Previsión Social, que la señora Araos Garnica ha recibido un total beneficios concedidos en las Leyes N° 19.992 y 20.874 de \$38.154.684.-, teniendo una pensión actual Valech de \$242.262.-, lo cierto es que tales beneficios no son incompatibles con las indemnizaciones que por esta vía se solicitan, rechazándose en definitiva esta excepción.

Aquello por cuanto las mencionadas leyes por el Fisco de Chile si bien corresponden a un reconocimiento del Estado de Chile de su deber de reparar el daño causado a víctimas de violaciones a los derechos humanos o a sus familiares directos, en modo alguno impiden ejercer el legítimo derecho de todo ciudadano afectado por el actuar doloso de agentes del Estado de obtener una indemnización distinta de una reparación de carácter meramente asistencial, que es lo que establecen las leyes aludidas, sin desconocer que tales beneficios constituyen un esfuerzo del Estado de reparar el daño moral experimentado por aquellas víctimas, objetivo resarcitorio coincidente con la presente vía jurisdiccional pero no incompatible.

A mayor abundamiento, cabe señalar que los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en las leyes N° 19.123, 19.980, 19.992, 20874, entre otras, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin de que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por el daño moral provocado por agentes del Estado, los que en ejercicio de su función pública, durante un período de extrema anormalidad institucional representando al gobierno de la época, abusaron claramente de su potestad y representación, dando lugar a los agravios a los derechos humanos de diversos conciudadanos que tenían una determinada visión política, cual es lo acontecido en la especie.

Por lo expuesto, parece también razonable que la reparación que haya hecho el Estado en relación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos no puede dejar de considerarse al momento de determinar el monto



Foja: 1

de los perjuicios, ya que estas medidas tienen un efecto en la extensión del daño cuya indemnización ahora se demanda.

En definitiva, será rechazada la excepción de reparación integral opuesta por la parte demandada.

DUODÉCIMO: Que, por otra parte, la demandada alega la prescripción de la acción de 4 años contemplada en el artículo 2332 del Código Civil, y, en subsidio, de 5 años establecida en el artículo 2515 del mismo cuerpo normativo.

Al efecto, es necesario tener en consideración lo dispuesto en el mencionado artículo 5 de la Constitución Política de la República que prescribe que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y que es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, por cuanto esta disposición constitucional permite la incorporación al derecho nacional de las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales que recogen principios generales del derecho humanitario, entre los cuales se cuenta la obligación de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos, la que entonces adquiere rango constitucional.

Teniendo presente lo anterior, y lo mencionado en la consideración novena, la prescripción extintiva de las acciones deducidas por la demandante no puede decidirse sobre la base de las disposiciones del Código Civil, toda vez que este cuerpo normativo busca regular las obligaciones que surgen para los sujetos por un concurso real de voluntades, un hecho voluntario de la persona que se obliga, un hecho que ha inferido daño o injuria a otra persona o por disposición de la ley, resolviendo situaciones de relativa equivalencia o de igualdad, mientras que el Estado, respecto de quienes habitan dentro de sus fronteras y quedan por ende sujetos a su jurisdicción, no actúa respecto de ellos en igualdad, se relaciona con las personas desde su posición de autoridad, como garante de los derechos fundamentales de que las personas son titulares.



Foja: 1

Es por ello que el estatuto jurídico comprendido y conformado por el derecho común, de donde emana la norma de prescripción invocada por la demandada, resulta insuficiente para resolver acerca de la prescripción de las acciones que emanan del hecho ilícito en cuestión, cual es, la comisión de crímenes de lesa humanidad y la consecuente necesidad de reparación, la acción indemnizatoria en tal caso queda de cargo de las normas que emanan del derecho internacional de derechos humanos y del ius cogens o reglas imperativas de derecho internacional que protege valores esenciales compartidos por la comunidad internacional.

Dado que no existe norma internacional expresa, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico, que establezca la imprescriptibilidad genérica de acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, de los variados tratados internacionales suscritos por Chile, como los ya mencionados, es posible concluir que ante las violaciones de derechos fundamentales, anteriores y superiores estos al Estado mismo, y nuestra Constitución, en cumplimiento de sus obligaciones de respetar, garantizar y no discriminar, la aplicación que se haga del derecho interno a la luz de los tratados internacionales debe conducir a darles seguridad y eficaz protección a los derechos, reconociendo, declarando y potenciando la vigencia de éstos, debiendo por tanto el Estado cumplir con su obligación no solo de investigar y sancionar los hechos que constituyen violaciones a los derechos humanos, sino que reparar a las víctimas de aquellos en su integridad.

De esta manera, se concluye que la acción resarcitoria que nace de la comisión de delitos de lesa humanidad es imprescriptible, de modo que siendo el hecho generador del daño que se invoca la violación de derechos humanos, no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles resarcitorias comunes, de naturaleza meramente patrimonial, ya que existe un estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por nuestro país al efecto, los que deben primar por sobre las normas civiles internas.

Los razonamientos anteriores conducen al rechazo de la excepción de prescripción enarbolada por la parte demandada.



Foja: 1

DÉCIMO TERCERO: Que, descartadas las alegaciones realizadas por la demandada, corresponde determinar si concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada, atendida la normativa mencionada y los hechos establecidos por parte del Tribunal.

DÉCIMO CUARTO: Que, habiéndose establecido que el daño causado por la conducta ilícita de los funcionarios o agentes del Estado autores de los ilícitos de lesa humanidad debe ser indemnizado por el Estado, por tanto hace responsable al Estado, procede determinar la cuantía del daño moral que reclama la actora, toda vez que su existencia fue analizada en el considerando octavo.

El daño moral será entendido como una lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a las personas e imputable a otra.

En la especie, atendido los hechos asentados y considerando la gravedad de las violaciones a derechos humanos tan esenciales como la libertad y la integridad física y psíquica a que fue sometida la demandante con motivo de su detención, tortura y prisión política por quien está llamado constitucionalmente a resguardarlos, la angustia de temer por su vida, el hecho de hallarse en un estado de vulnerabilidad, el dolor, las amenazas y el daño físico y psíquico provocados, que importa un sufrimiento corporal y psíquico que se constituye como un dolor de la persona constitutivo de daño moral, el cual debe ser resarcido.

Lo anterior no puede si no ser analizado en su contexto, como se ha indicado, debido que es posible presumir que el temor ocasionado por las circunstancias de la época naturalmente incrementó dicha aflicción, siendo detenida la actora cuando era muy joven cuyas secuelas psicológicas son de aquellas que perduran de por vida, truncando el normal desarrollo, debido al actuar ilegal llevado a cabo por agentes del Estado.

De esta manera, el daño moral ocasionado a la demandante no es sino una consecuencia inmediata y directa de la detención, torturas y prisión política cometida por agentes del Estado, secuelas psicológicas y emocionales que han permanecido a lo largo de los años.



Foja: 1

DÉCIMO QUINTO: Que, así las cosas, habiéndose determinado la existencia del daño moral sufrido por la demandante y la responsabilidad del Estado de indemnizar éste, corresponde fijar su cuantía en dinero, para lo cual el tribunal considerará el mérito de los antecedentes aportados al proceso, fijando el quantum indemnizatorio conforme a la entidad y naturaleza del daño ocasionado a la víctima que permita en algún modo reparar, mitigar o ayudar a sobrellevar el dolor causado por el hecho ilícito asentado, como la revictimización causada a causa de la exposición posterior de los hechos, lo que se hará prudencialmente, ante la imposibilidad de fijar con alguna exactitud y certeza la suma que sirva a esos objetivos, a fin de cumplir con el principio de reparación integral que rige en la materia.

Así las cosas, el tribunal regulará la cuantía del daño moral en la cantidad total de veinticinco millones de pesos (\$25.000.000).

DÉCIMO SEXTO: Que, la suma ordenada pagar deberá reajustarse conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada; y, respecto de los intereses, estos se devengarán a partir de la fecha en que la parte demandada se constituya en mora.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, atendido lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, no habiendo resultado totalmente vencida y estimando que la demandada ha litigado con motivo plausible, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 47, y siguientes, 222 y, 224, 236, 1437, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 342, 346, 384, 426, 427 y 428 del Código de Procedimiento Civil; Constitución Política de la República; Convención Americana de Derechos Humanos; y demás normas pertinentes, **se resuelve:**

I.- Que se **rechazan las excepciones** de reparación integral y prescripción deducidas por la parte demandada.

II.- Que se **acoge parcialmente la demanda**, interpuesta a folio 1, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile a pagar a título de daño moral, la suma de veinticinco millones de pesos (\$25.000.000) a favor de la



C-13140-2023

Foja: 1

demandante Myriam Del Carmen Araos Garnica, con los reajustes e intereses consignados en el fundamento décimo sexto precedente.

III.- Que se exime del pago de las costas a la parte demandada.

Notifíquese por cédula a las partes.

Anótese, regístrese, consúltese si no se apelare, y archívese en su oportunidad.

ROL C-13140-2023.

Sentencia dictada por **Mindy Villar Simon**, Juez Suplente del Séptimo Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, diez de abril de dos mil veinticinco**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DQNZXTJSXHX

